

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: MARCIA OSORIO SÁNCHEZ
DEMANDADO :	: COLPENSIONES y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2018-00350-01
RADICADO INTERNO	: 182-22
DECISIÓN	: -CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 269

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicitó se DECLARE la nulidad del dictamen No. 2016156245 realizado por Colpensiones el 2 de junio de 2016 y el dictamen No. 62522 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 18 de junio de 2016; se declare que la demandante presenta una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% de origen común, con fecha de estructuración del 25 de noviembre de 2007.

Se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez en forma retroactiva desde el 25 de noviembre de 2007, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre; al pago de los intereses moratorios; la indexación; y se condene a las demandadas en costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que, la demandante fue afiliada al Régimen de Prima Media desde el 15 de junio de 1994; fue calificada por Colpensiones y en el dictamen del 2 de junio de 2016 le fue asignada una pérdida de la capacidad laboral del 40.7% con fecha de estructuración del 24 de mayo de 2016 de origen común. Por estar inconforme con el dictamen anterior, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió nuevo dictamen el 18 de junio de 2016, en donde asignó una pérdida de la capacidad laboral del 43.11% con fecha de estructuración del 28 de octubre de 2016 de origen común. Y a la demandante se le practicó un nuevo dictamen, por la IPS Universitaria, el 18 de julio de 2017, en el que se estableció que tiene una pérdida de la capacidad laboral del 62.50% con fecha de estructuración del 25 de noviembre de 2007.

Considera la demandante, que los dictámenes de Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, no son coherentes con el complejo patológico, porque los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral y fecha de estructuración son disímiles en los referidos dictámenes, respecto del practicado por la IPS Universitaria y no corresponden a la historia natural de la patología, presentada por la demandante con unos 10 años de evolución. La demandante cuenta con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez por tener entre el 25 de noviembre de 2004 y el 25 de noviembre de 2007, más de 50 semanas. La demandante elevó relación el 13 de febrero de 2018, sin que la entidad haya dado respuesta.

RESPUESTA A LA DEMANDA

Colpensiones en la contestación de la demanda aceptó la afiliación al Régimen de Prima Media; las calificaciones de pérdida de la capacidad laboral realizadas por Colpensiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la IPS Universitaria. No es cierto que Colpensiones no haya dado respuesta a la solicitud de pensión de invalidez, ya que mediante resolución

75.518 de 2018, respondió la solicitud del 13 de febrero de 2018, en la que negó el reconocimiento de la prestación. Frente a los demás hechos, indica que son apreciaciones personales. Se opuso a las pretensiones instauradas en contra de Colpensiones (fl. 128 a 136 expediente digital 01).

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA en la contestación de la demanda, aceptó la calificación realizada a la demandante. No es cierto que las patologías de los dictámenes de Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, no son coherentes con los tenidos en cuenta por la IPS Universitaria. No le constan los demás hechos. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda (fls. 153 a 155 expediente digital 11).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 24 de junio de 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a Colpensiones y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra. Costas a cargo de la parte demandante.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante solicita se revoque la sentencia y se condene a Colpensiones a pagar la pensión de invalidez, **en primer lugar**, porque los dictámenes de Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia deben ser declarados nulos, al no ser coherente con el complejo patológico que sufre la demandante, pues si bien, el juzgado no está sometido a la tarifa legal de prueba y puede fundar su decisión con el dictamen que le ofrezca mayor credibilidad, sin embargo, al analizar los dictámenes proferidos por Colpensiones y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, tuvieron en cuenta el rol laboral, sin que pudiera haber sido calificado al no ser coherente con el Decreto 1507 de 2014; con fundamento en lo anterior, es que se practicó el dictamen de la IPS Universitaria, en el que se visualiza que no es calificado el rol laboral, debiendo ser calificada “otras áreas ocupacionales” relativa a personas que ocupan su tiempo en actividades de ocio y esparcimiento, mayores de 60 años, y no están

incluidos en el mercado laboral, tal y como fue calificado por la IPS Universitaria y el dictamen de la U de A. la demandante debió ser valorada en “otras áreas ocupacionales” con el 25% y no con el 10% como lo hizo la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

Y porque si se visualiza la clase funcional que presenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, pese a ubicarse en la clase con factor modelador 1, ello es, el 37%, y la tabla 14.15 en la clase 3 en grado de severidad A, asignando un 37%, se ve que realmente existe un compromiso funcional ostensible que no es coherente con un 37%.

En consecuencia, de lo anterior, quedaría la existencia de los dictámenes de la IPS Universitaria y de la Facultad de Salud Pública de la U de A, los cuales, al ser comparados, son coherentes en el grado de complejidad de la definición de la fecha de estructuración y ambos peritos acogen la definición de la fecha de estructuración del Decreto 1507 de 2014.

En ese sentido, el Dr. Jorge William Vargas tiene en cuenta como elemento adicional, la historia natural de la enfermedad, ante la ausencia de la historia clínica, parámetro que es reconocido y utilizado por la Facultad de Salud Pública de la U de A; advierte el apelante, que existen procesos que se salen del curso normal, y es ahí donde el Juez laboral hace su labor; el hecho de ausencia de la historia clínica más la complejo patológico como la artrosis generalizada, osteoartrosis generalizada y la osteoporosis calificada, se reconoce que es una enfermedad que lleva más de 10 – 20 años de evolución, tal y como lo dijo la perito Dra. Marta Lucia Escobar; la perito en mención indicó que se trata de un caso complejo y al analizar su declaración, se entiende que en efecto, lleva muchos años de evolución esa patología.

En el recurso, se hace lectura de la definición de fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral contenida en el art. 2º del Decreto 1507 de 2014; que es coherente con la patología, evolución y la historia natural de la enfermedad de la demandante y coherente con el momento en que fue determinado por la IPS Universitaria, ello es, para el 25 de julio de 2007, apoyándose en las declaraciones extraproceso, la historia laboral, en concordancia con el examen físico practicado a la demandante dentro de este

proceso al momento en que se elaboró el dictamen; considera que es más coherente el dictamen del Dr. Jorge William Vargas, porque la Dra. Marta Lucia Escobar manifestó que al momento de efectuar el dictamen no visualizó a la demandante para mirar la complejidad de su estado físico.

Resalta que en el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A, se incluyó la patología de la arritmia cardíaca y al respecto dijo la Dra. Marta Lucia Escobar, que al ser excluida esa patología, posiblemente le daba un grado de invalidez, que esa afirmación es la razón por la que el Dr. Jorge William Vargas califica la artrosis primaria generalizada utilizando la tabla 14.15 por las razones que indica la Dra. Marta Lucia Escobar, porque compromete la artrosis, dos o más articulaciones, ello genera que se ubique en la clase 4, por las razones que el Dr. Jorge William Vargas indicó, al expresarle al despacho que contaba con más del 50% de signos o síntomas que lo componen enumerándolos de la parte superior a la parte inferior de 1 a 8, cumpliendo el criterio 3º o enumerando los de la clase 4 del 1 a 8 de la parte superior a la parte inferior y que cumple los criterios 3 y del 5 al 8, de la tabla 14.15 y por ellos indicó el Dr. Jorge William Vargas que existe un compromiso del estado general.

Reitera que este se trata de un caso especialísimo, donde la historia natural debe ser entendida ante la ausencia o limitación de la historia clínica, y se puede tener los parámetros para dirimir estos procesos; que se aportaron pruebas que dan a entender que la evolución viene con muchos años de evolución, y así lo indican los especialistas en sus declaraciones.

Con base en lo anterior, solicita se acoja el dictamen de la IPS Universitaria porque cumple con todos y cada uno de los requisitos impuestos en el art. 226 del CGP.

En segundo lugar, considera que la demandante cumple con el requisito de semanas de la Ley 860 de 2003, porque al realizar el conteo de las semanas desde el 25 de junio de 2007, en los 3 años anteriores, tiene 50 semanas, por lo que solicita que la prestación sea reconocida desde noviembre de 2007 sin lugar a la prescripción en virtud de lo señalado en la sentencia SL 1562 de 2009 y 53.600 de 2015 en las que se indican que no lugar a aplicar el fenómeno de la prescripción porque es en este momento que se conoce el

estado real de invalidez. Aunado a lo anterior se reconozcan los intereses moratorios o la indexación de las mesadas.

Y señala que en estos procesos se demanda el criterio material de invalidez, en donde en realidad una persona es invalida cuando no puede seguir ofreciendo su fuerza laboral por la disminución sustancial de sus capacidades físicas e intelectuales; que ese criterio es aplicado por la Corte Constitucional y la evolución de la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones en sus alegatos hace un recuento de los hechos y las pretensiones; invoca los arts. 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, y señala que no se desconoce que la demandante ostenta la calidad de inválida, conforme al dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A al compartir la sustentación dada por la Dra. Martha Lucia Escobar, en donde se indicó “Con los datos aportados no es posible establecer una fecha de estructuración anterior, porque por la historia de la enfermedad es posible que en 2007 ya presentara la patología, pero por ser de carácter degenerativo, no se puede afirmar que su condición de nódulos interfalángicos en manos y dolor le produjeran para ese entonces una pérdida de la capacidad laboral mayor al 50.0%.”.

Igualmente señala la apoderada, que se aparta de los criterios utilizados por el Dr. José William para establecer la fecha de estructuración, lo cual tuvo lugar con la información dada por la demandante y las declaraciones extrajudio; y resalta que en la historia laboral se acredita que la demandante realizó cotizaciones durante todo el año 2007, lo que significa que la demandante no dejó de laborar en el 2007.

En relación al requisito de semanas, manifestó que no lo cumple, porque entre el 28 de octubre de 2013 al 28 de octubre de 2016 acredita cero semanas, y su última cotización fue en el mes de noviembre de 2008.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar: i) Si hay lugar a declarar la nulidad de los dictámenes de Colpensiones y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia por haber calificado el rol ocupacional y por haber calificado en forma deficiente con la tabla 14.15; ii) Si se debe dar validez al dictamen emitido por la IPS Universitaria, al haber calificado con base en la historia natural, donde se tuvo en cuenta una fecha de estructuración del 25 de noviembre de 2007; iii) Si el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez, intereses moratorios o indexación, por haber acreditado 50 semanas en los 3 años anteriores al 25 de noviembre de 2007; iv) En caso de reconocer la pensión de invalidez, analizar si se debe aplicar el fenómeno de la prescripción.

En primera instancia consideró la A Quo que no había causa, para declarar la nulidad de los dictámenes de Colpensiones y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, ya que en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la demandante, en sede administrativa, los elementos de historia clínica de la demandante fue limitada y a la demandante no se le practicaron exámenes diagnósticos que fueron requeridos por Colpensiones para valorarla; que los dictámenes se elaboraron con las justificaciones médicas extraída de la escasa historia clínica, no son arbitrarios, no generan errores técnicos y no hay prueba seria al respecto, los dictámenes se encuentran conforme a lo establecido en el Decreto 1507 de 2014 y advirtió que en este caso, el estado de salud de la demandante se agrava dado las progresividad de las patologías.

Al valorar el dictamen de la IPS Universitaria, resaltó circunstancias problemáticas del mismo, porque no existe evidencia científica dentro del expediente que permita sustentar que las patologías de la demandante se enmarcaran en los criterios para la definición de la deficiencia de la clase 4 ubicado en la tabla 14.15; el método utilizado para la definición de la fecha de estructuración, no se compadece con el tecnicismo del art. 3 del Decreto 1507 de 2014, porque esa norma establece un criterio principal, que corresponde al criterio técnico científico, que se genera en la valoración de la historia clínica y exámenes diagnósticos y solo a falta de este y en forma subsidiaria se podía acudir a la historia natural de la enfermedad y en este caso existe historia

clínica escasa; que omitir lo informado en la historia clínica para así alegar su inexistencia y aplicar la historia natural de la enfermedad para ubicar una fecha de estructuración para el mes de noviembre de 2007, no se compadece con los criterios técnico científicos del Manual.

Igualmente se determinó, que las explicaciones dadas en la sustentación del dictamen y las plasmadas en el dictamen no corresponden conclusiones científicas para fijar la fecha de estructuración, porque se partió de elementos probabilístico, tal y como es, el momento en el cual aparentemente pudieron definirse algunas secuelas en el estado de salud de la demandante; consideró que la evaluación de la fecha de estructuración con base en declaraciones extrajuicio o con base en lo manifestado por la misma demandante, no se pueden valorar bajo las reglas de la sana crítica de la prueba, en vista que el Manual de Calificación no permite que la definición de fecha de estructuración sea conforme a declaraciones extrajuicio ni conforme a los dichos del mismo paciente; señaló que las opiniones de terceros son irrelevantes e inconducentes y frente a las declaraciones extrajuicio, aclaró que no se tiene conocimiento quienes son, no se expuso la ciencia del dicho y no se sabe si se trataba de testigos técnicos pareo que indiquen que la demandante estaba en imposibilidad de trabajar a partir del año 2007.

Así mismo consideró la A Quo, que le da más credibilidad el dictamen practicado por la Facultad de Salud Pública de la U de A, al ser más riguroso, y con base en el declaró que la Sra. Marcia Osorio Sánchez cuenta con un estado de invalidez, con una pérdida de la capacidad laboral del 53,88% estructurada el 28 de octubre de 2016.

1. Frente a la nulidad de los dictámenes de Colpensiones y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia

Considera el apoderado de la parte demandante, que en este evento no se podía calificar el rol ocupacional, por tratarse de un adulto mayor.

Al respecto, si bien es cierto que al ser la Sra. Marcia Osorio Sánchez una persona que para el año 2016 (año de la calificación realizada por Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia)

era una adulta mayor, que contaba con 73 años de edad y en el dictamen de Colpensiones se plasmó que era desempleada, no se puede pasar por alto que el Manual Único de Calificación en el Título II, por medio del cual se determinan los parámetros para calificar el rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, adopta dos tipos de poblaciones, que a saber son:

*“... a. Personas en edad económicamente activa (conformada por las personas en edad de trabajar), incluye menores trabajadores, jubilados y pensionados que trabajan y **adultos mayores que laboran**.*

b. Bebes, niños, adolescentes y adultos mayores.

*Las personas en edad económicamente activa, son las que cuentan con un rol laboral y el grupo de los bebés, niños, adolescentes y **adultos mayores (que no trabajan) tienen un rol ocupacional de juego, estudio (vida escolar) y uso del tiempo libre o de esparcimiento, respectivamente.** (...)”* (Resalto de la Sala)

Siendo ello así, como los adultos mayores pueden estar incluidos en la calificación, tanto de las personas laboralmente activas, como de las personas sin un rol laboral, considera la Sala que se hace necesario se demuestre, el cese de la actividad laboral, sin que sea asumido por el ente calificador con base en la simple manifestación realizada por la parte demandante, dado que cuenta con un interés de parte.

La anterior afirmación encuentra sustento en la sustentación dada por la perito de la Facultad de Salud Pública de la U de A cuando afirmó lo siguiente: *“El cese de actividades en personas como la Sra. Marcia Osorio, con estas patologías que ha descrito, el cese puede ser un elemento también adicional para definir fecha de estructuración o debe ser excluido, según su concepto? Es difícil porque el cese de actividad laboral debe ser certificado. Cuando una persona tiene una alteración, para eso existe la medicina laboral y esta persona dice que debe ser reubicada, no tiene posibilidades de trabajo, entonces eso es una certificación argumentada desde el contexto, porque si no se convierte en una situación que es muy frecuente en el laboratorio y es que “Doctora yo ya no me siento capaz de trabajar” y eso yo lo comprendo y sé que las situaciones de la población trabajadora son complejas, pero ese no es un argumento válido para los elementos de calificación, porque la medicina laboral tiene algunos elementos importantes de definir cuándo una persona no puede trabajar. Muchas veces ustedes pueden ver personas que les dicen,*

esta persona se puede reintegrar al trabajo, haciendo unas adecuaciones al puesto de trabajo y él dice “yo no puedo trabajar” porque tiene unas percepciones, autopercepción de su condición bastante, más dramática de lo que un médico puede evaluarlo muchas veces o hay una necesidad secundaria de una pensión o una indemnización. Hay muchos factores. Por eso es complejo por una opinión y más de la persona afectada.” (min 1:15:20 enlace acta expediente digital 37).

En consideración a lo señalado, al no existir prueba donde se acredite que la Sra. Marcia Osorio Sánchez puso en conocimiento de Colpensiones y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el cese de actividades laborales, es por lo que no se accederá a la declaratoria de la nulidad solicitada por la parte demandante, siendo lo legal y pertinente, confirmar la sentencia en este punto en concreto y más cuando desde las pretensiones de la demanda no se expuso este argumento como causal de nulidad, pues en el hecho 5º de la demanda se considera que los dictámenes no son coherentes con el complejo “patológico” de la Sra. Marcia Osorio Sánchez.

Ahora bien, en relación al porcentaje dado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia a la deficiencia de Poliartrosis, que lo fue del 37%:

Sea lo primero manifestar que tal y como se indicó en forma reiterada en primera instancia, el Juez no está sometido a la tarifa legal, puede apreciar la prueba aportada en forma libre a efectos de formar su convicción y así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente SL 2082 de 2022, en donde señaló:

“Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que aun cuando la prueba idónea para determinar el estado y porcentaje de pérdida de capacidad laboral de una persona es el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez, así como, por los organismos arriba citados, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 27 jun. 2002. Rad. 17999, CSJ SL, 29 jun. 2003, rad. 20558, CSJ SL 24 sep. 2003, rad. 21113), también ha reconocido que el juez puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, sin que la circunstancia de que acuda a unos

medios de convicción con preferencia sobre otros, pueda considerarse como un yerro de apreciación, pues así lo reconoce el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 61 del CPTSS.”
(Resalto de la Sala)

Siendo así las cosas, considera la Sala que no hay lugar a declarar la nulidad del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia por haber adoptado el 37% de la deficiencia en mención, primero, porque no se encuentra probado un vicio en la calificación en mención, a sabiendas que la totalidad de los dictámenes que reposan en el plenario, ellos son, de Colpensiones, la IPS Universitaria y la Facultad de Salud Pública de la U de A, concuerdan con calificar las enfermedades del sistema osteomuscular con la misma tabla 14.15, y la misma tabla fue adoptada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

Y en segundo lugar, porque no obstante, haber aplicado la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la Tabla 14.15, clase 3 literal A que generó un 37% mientras que el dictamen de la IPS Universitaria (que pretende hacer valer el demandante) acogió la tabla 14.15, clase 4 literal B que generó un 75%, el cual considera la Sala no podía ser acogido, en tanto la Dra. Marta Lucia Escobar (perito de la Facultad de Salud Pública de la U de A) manifestó en la sustentación del dictamen, que la demandante no estaría dentro de clase 4 porque su aplicación se genera cuando las personas no tiene posibilidad de moverse ni de tener rasgos de independencia, y si bien es cierto, la perito no hizo un estudio físico de la demandante dado las restricciones de la pandemia, advirtió que la calificación lo hizo con base en **conceptos especializados**, lo cual se aleja de la calificación dada por la IPS Universitaria, pues esta entidad se basó en manifestaciones dadas por la misma demandante, así fue expresado por el Dr. Jorge William Vargas, cuando afirmó en la sustentación del recurso, que la demandante manifestó que su patología tenía una evolución de más de 20 años y con base en ello concluyó el perito, que la demandante era una paciente que desde los 60 años, podía estar presentando limitaciones importantes en las extremidades superiores e inferiores y por eso debía tener ese grado de severidad importante. En consecuencia, bajo la manifestación poco científica y meramente probabilística, alejada de las exigencias de la ley sobre esta materia, dada por el perito de la IPS Universitaria, a esta Corporación no le genera credibilidad el porcentaje del

75%, adoptado por la IPS Universitaria, se repite, por la falta de tecnicismo al momento de calificar la deficiencia denominada Artrosis primaria generalizada.

Con base en lo expresado es que no se declarará la nulidad de los dictámenes de Colpensiones y de la Facultad de Salud Pública de la U de A, así como tampoco hay lugar a asumir que la deficiencia calificada con la Tabla 14.15, por la totalidad de los entes calificadoros, sea el 75% conforme fue indicado en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral de la IPS Universitaria.

2. Frente a la validez del dictamen emitido por la IPS Universitaria, al haber calificado con base en la historia natural de la enfermedad

No existe discusión que el Decreto 1507 de 2014 en el art. 3º se define la fecha de estructuración así:

“Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

(...)

Fecha de estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.

Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral. (...) (Resalto de la Sala)

Si bien es cierto que el presente asunto, es un caso especial, bajo el entendido que existe insuficiente historia clínica y ayudas diagnósticas para entrar a calificar a la demandante y que las patologías son degenerativas, ello no implica que la fecha de estructuración se soporte con la historia natural de la enfermedad teniendo como sustento las declaraciones extrajuicio de las

señoras Martha del Socorro Saldarriaga Meses y Aura Cecilia Cano, que informaron que la Sra. Marcia Osorio Sánchez padece artritis desde finales del año 2007 y que ello le ha generado deformidad en ambas manos, motivo por el cual está imposibilitada para trabajar (fls. 40 y 41 del expediente digital 01), ni con base en la manifestación realizada por la demandante al Dr. Jorge William Vargas, cuando le informó sufrir la patología hacía 20 años, pues en caso de ser aceptado, ello generaría que desaparecieran las entidades calificadoras y en consecuencia, desaparecerían los conocimientos especializados o técnicos plasmados en los dictámenes periciales, pues una persona sin conocimiento técnico, científico y especializado, podría entrar a determinar la oportunidad en que el paciente perdió la capacidad para laborar y la fecha en que dicha pérdida se estructuró.

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar la explicación dada por la Dra. Marta Lucia Escobar (perito de la Facultad de Salud Pública de la U de A), frente a la calificación con base en la historia natural de la enfermedad, la cual expresó, que la historia natural de la enfermedad es “lo que se conoce de la ciencia médica, el proceso que sufre una persona con cierta enfermedad, el proceso estandarizado de una enfermedad”, que ha aplicado la historia natural de la enfermedad cuando no hay historia clínica, pero cuando se ha presentado evidencia clínica. Ejemplificó su implementación, en el caso de un joven con síndrome de down, que corresponde a un trastorno genético, donde la historia natural de la enfermedad es que se rehabilita, se integran, pero tiene daños cognitivos, **en ese caso, se puede definir que esa persona desde que nació tiene la enfermedad.** Pero en el evento de un joven con síntomas de daño cognitivo por una caída desde un segundo piso, donde no había historia clínica y había situaciones donde se decía que, a partir de qué fecha, en este caso aclaró la perito, que sin la historia clínica y pasados 10 o 15 años **no puede definir si la persona con ese trauma lo tuvo estando chiquito o desde los 14 años.** Y concluyó manifestando que ella lo ha utilizado en temas específicos y cuando “tiene la posibilidad de jurar que así fue”.

La anterior explicación permite a la Sala inferir, que en este evento, al darse la aplicación de la historia natural de la enfermedad, no es posible concluir que para el año 2007 la patología padecida por la demandante se presentaba, pues se trata de una osteoartritis primaria generalizada, según se determinó en el

dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A, y al tratarse de una enfermedad degenerativa, no se tiene conocimiento de la fecha a partir de la cual la empezó a sufrir la demandante. Y tampoco se pueda determinar la fecha de estructuración con base en la información dada por la Sra. Marcia Osorio Sánchez al Dr. Jorge William Vargas, cuando aseguró que su patología la padecía con 20 años de anterioridad, porque de lo explicado por la Dra. Marta Lucia Escobar, se puede decir sin lugar a equivoco, que dicha información no corresponde al “proceso estandarizado de la enfermedad” y no cuenta con un sustento médico científico con el que se logre determinar que el padecimiento de la demandante puede tener inicios en el año 2007 ni que en esa oportunidad se estructuró la pérdida de la capacidad laboral.

En consideración a lo anterior, no se da validez al dictamen emitido por la IPS Universitaria, ni a la fecha de estructuración determinada en el mismo, debiendo ser confirmada la sentencia de primera instancia.

Al no salir avante la solicitud de la parte demandante, de darle validez al dictamen de la IPS Universitaria, ni de acogerse la fecha de estructuración allí plasmada, no se hace necesario analizar los demás puntos de apelación correspondientes al reconocimiento de la pensión de invalidez, intereses moratorios o indexación, ante el cumplimiento de las 50 semanas en los 3 años anteriores al 25 de noviembre de 2007; ni se hará pronunciamiento frente al fenómeno de la prescripción.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, en la suma de \$500.000 a favor de Colpensiones y \$500.000 a favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, en la suma de \$500.000 a favor de Colpensiones y \$500.000 a favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, por no haber prosperado el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MARCIA OSORIO SÁNCHEZ
DEMANDADO :	: COLPENSIONES y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2018-00350-01
RADICADO INTERNO	: 182-22
DECISIÓN	: -CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 13 de octubre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 13 de octubre de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO